

OPINIÓN

EDITORIAL

Es deber de las autoridades garantizarles a los familiares del ganadero una búsqueda día y noche hasta encontrarlo y rescatarlo sano y salvo. El Atlántico no puede transformarse en un criminal escenario del secuestro y el abigeo.

El secuestro de Ponedera

EL HERALDO

Diario de la Mañana
Fundado en 1933
Miembro de la SIP
y de Andiaros
Socio fundador
de Colprensa

Calle 53B N°46 - 25
Barranquilla
Apartado Aéreo 157
Tel. 3715000
Fax 3715091
Nit 890.100.477 8

DIRECTOR CONSEJERO
Juan B. Fernández
Renowitzky

PRESIDENTE
Francisco Posada Carbo

GERENTE
Elaine Abuchaibe Aua

El Atlántico ha venido siendo objeto de una ola de abigeato en los últimos tiempos que las autoridades no han encontrado la forma de acabar. Pero con el secuestro del ganadero Monarce Antonio Sarmiento Pacheco el ataque no es solo ya a las vacas sino a la libertad de las personas. Grave, por supuesto, ambas cosas: tanto la agresión a la propiedad privada como a los ciudadanos.

El hecho se produjo en una finca del municipio de Ponedera, donde reside este hombre de negocios del campo, graduado en Derecho, que a sus 63 años han expuesto a la dura prueba del secuestro, motivado, al parecer, por razones económicas. De inmediato las autoridades activaron un operativo en marcha para dar con el paradero de Sarmiento, a quien venían haciendo víctima

del robo de ganado.

Según la descripción de sus familiares, Sarmiento es una persona que requiere de ciertas medicinas y es abierta al diálogo, por lo que han pedido a sus captores le ofrezcan un buen trato.

De acuerdo con los informes de las autoridades, no había registros recientes de secuestro de ganaderos en el Atlántico, y este se convierte en una campanada de alerta, porque podríamos estar en presencia del inicio de una escalada contra el gremio ganadero del Departamento, lo cual impone a las autoridades civiles, policiales y militares una mayor acción de prevención y control en la zona rural.

Es claro que en el Atlántico operan grupos de criminales dedicados al robo y a la extorsión con el fin de obtener ilegales beneficios económicos. Las gen-

tes del campo en nuestro Departamento aspiran a vivir libres y en paz pero estas bandas de facinerosos se han convertido tanto aquí en la Región Caribe como en el resto del país en un gran riesgo para la democracia. La libertad es el don más preciado en una sociedad democrática, y si la nuestra se ufana de serlo, el secuestro constituye una práctica repulsiva que la ciudadanía rechaza y condena.

Por tanto, es deber de las autoridades garantizarles a los familiares del ganadero una búsqueda día y noche hasta encontrarlo y rescatarlo sano y salvo. El Atlántico no puede transformarse en un criminal escenario del secuestro y el abigeo. Es obligación del Estado impedir que esto llegue a suceder.

No olvidemos que buena parte de la justificación que se le dio al paramilitarismo en el pasado se

apoyó en que el Estado no lograba proveer la seguridad en la totalidad del territorio nacional.

En el Atlántico, en la zona rural, habíamos logrado cierta tranquilidad, pero ahora ha renacido el miedo con el disparo del abigeato y con mayor razón con el secuestro de Sarmiento.

Energía, mucha energía tienen que desplegar las autoridades. Tiene que haber más operativos en las zonas rurales, más presencia de policías y soldados, más colaboración de la ciudadanía.

El gobernador José Antonio Segebre tiene que mostrar mucha acción en este tema. La seguridad y la tranquilidad no son cosas que baste predicarlas. Es algo de la vida cotidiana que los gobiernos tienen que garantizar. Abogamos por la pronta liberación del ganadero secuestrado.

La libertad es el don más preciado en una sociedad democrática, y si la nuestra se ufana de serlo, el secuestro constituye una práctica repulsiva que la ciudadanía rechaza y condena.

Guerra de vallas

Por Óscar Montes

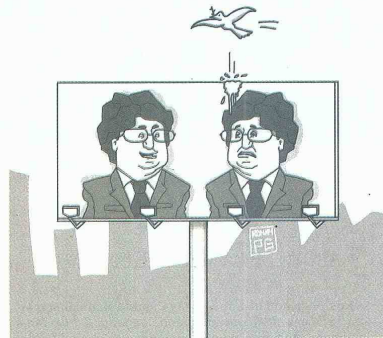
Contrario a quienes de un tiempo para acá promueven una especie de pacto de no agresión entre dirigentes políticos y nacionales, creo que lo que hay que hacer es todo lo contrario: proponer que unos y otros debatan abiertamente y de cara al país todos los temas y ventilen públicamente todas sus diferencias. El problema no es que confronten esos asuntos de la vida nacional: el problema es que lo hacen sin argumentos y sin fundamentos.

Si el procurador Alejandro Ordóñez tiene serias y profundas diferencias con el fiscal general Eduardo Montealegre sobre el tratamiento que se les debe dar a los guerrilleros de las Farc que se desmovilicen como producto de la negociación de La Habana, pues que las diriman en cuanto evento asistan y que cada uno defienda sus posturas y que los

espectadores de esos eventos opinen sobre los mismos y que los medios de comunicación los cubran y los divulguen.

En un sistema democrático deben tener cabida todas las vertientes ideológicas y políticas, mucho más si se trata de altos funcionarios del Estado. Si el Procurador es de derecha, pues que defienda con argumentos y con vehemencia sus tesis, y si el Fiscal es de izquierda, que haga lo propio. Pero que ambos ofrezcan garantías a quienes piensan diferente a ambos. Lo que resulta nocivo para el sistema no es la confrontación de tesis, sino el unanimismo que hoy muchos pregonan, nerviosos con el tono de la discusión de los dirigentes políticos y los altos funcionarios del Estado.

El problema, repito, no es la confrontación pública, es la falta de argumentos, que termina llevando la discusión a su nivel más bajo, que no es otro que la descalificación del contrario y la agresión personal. Ese es el



verdadero problema. ¡Qué bueno que el Procurador y el Fiscal piensen diferente! ¡Qué bueno que uno se defina de derecha y el otro de izquierda!

Lo malo sería que todos pensarán igual, como ha ocurrido en oportunidades anteriores en las que todo el mundo está

de acuerdo con todo. Es en esos escenarios donde no tienen cabida quienes piensan de modo diferente y es ahí donde nacen las persecuciones contra todos aquellos que discrepan de la voz oficial.

La obligación del Estado es garantizar que quienes

piensan diferente puedan expresar sus ideas sin que ello signifique poner en riesgo su integridad o su vida.

Lo que hay que proponer, entonces, es que el debate de los grandes temas nacionales suba de nivel. La guerra de vallas a la que asistimos en estos días por cuenta de una estrategia publicitaria –puesta en marcha por el vicepresidente y precandidato uribista Francisco Santos Calderón– contribuye a la ‘venezolanización’ de la contienda electoral. Es decir, en lugar de subir la discusión, la lleva a las cloacas.

Poner a escoger a los colombianos entre dos males –guerrilla y narcotráfico– no es la mejor contribución para elevar el debate electoral. Colombia no merece que la pongan a elegir –aunque sea en una valla entre dos bandidos. Bastante hemos padecido sus fechorías y bastante hemos sufrido con su arremetida criminal como para que ahora tengamos que verlos a lo largo y ancho de las carreteras del país.

El riesgo que corre Pacho es que su efectismo, sin duda efectivo, puesto que todo el país habla hoy de sus vallas, puede salir demasiado costoso, como empieza a vislumbrarse con la respuesta de los jefes guerrilleros de las Farc en La Habana, quienes, en otra valla –esta virtual– se preguntan quién fue el que le propuso a Mancuso crear frentes de los paramilitares en Bogotá, versión propagada por los paramilitares y ahora avalada por los subversivos.

Pacho, que es una persona inteligente y que tiene sobre sus hombros la experiencia de haber ocupado por ocho años el segundo cargo más importante del país, debe reflexionar sobre el costo político de su estrategia, aunque ella le haya permitido posicionarse como el precandidato uribista con más opción para aspirar a la Presidencia de la República. No es la hora, apreciado Pacho, de sacrificar un país por pulir una valla.

oscar Montes65@yahoo.es

Los medios y el proceso de paz

Por Alfonso Gómez M.



Uno de los múltiples errores cometidos durante el fallido proceso del Caguán fue la forma como en determinado momento se manejó, cual si se tratara de un espectáculo y no de un intento serio por superar un conflicto armado de muchos años.

Las reiteradas imágenes de televisión de los guerrilleros

en actitud arrogante fueron creando un justificado ambiente de rechazo social. El tour al Caguán incluía no solo periodistas serios sino gentes de farándula, actores y actrices, de todos los pelambres, empresarios, los llamados ‘cacao’, el presidente de la bolsa de Nueva York, funcionarios públicos desviados de sus atribuciones, reinas de belleza y, como siempre, lagartos y políticos en busca de figuración.

Casi todos los días aparecían los jefes guerrilleros dando ofensivas declaraciones sobre su poder, exacerbando los ánimos de una opinión pública que recibió al comienzo con júbilo el proceso, para luego

rechazarlo abiertamente.

Recuerdo la imagen de la noche del 20 de febrero del 2002, el día del secuestro del avión de Aires y del senador Gechen Turbay, estando en un concierto de música colombiana con el presidente López Michelsen, cuando el presentador anunció la ruptura de los diálogos con las Farc: la gente se levantó para aplaudir a rabiar.

Esos errores no pueden repetirse. Desde luego, los medios deben cubrir lo que se está discutiendo en La Habana y transmitir la información oportuna y veraz a los ciudadanos sobre la forma como se van desarrollando las conversaciones. Deben

manejar con mucho cuidado las ‘filtraciones’ que siempre se hacen de manera interesada. No hay filtración gratuita, deberían privilegiar el debate serio y argumentado sobre lo puramente espectacular, como lo que ocurrió en el foro organizado en el Externado de Colombia, para analizar desde distintos ángulos el tema de la paz y los diálogos de La Habana.

Hubo sesudas exposiciones, como la de Sergio Jaramillo (publicada en forma completa en la edición de *El Tiempo* del martes pasado), algo comisionado de Paz, que desde el comienzo ha manejado con prudencia, talento

y discreción el complejo tema del acercamiento con la insurgencia para poner fin al conflicto armado e iniciar el verdadero proceso de paz que Colombia necesita.

Allí encontramos un análisis histórico, político y jurídico sobre la naturaleza del conflicto, sus alcances y las reales posibilidades actuales de ponerle término. El tema de cuál va a ser el alcance de la ‘cesión’ en materia de justicia se maneja con mucho tino, teniendo en cuenta que solo cuando se presente el proyecto de ley estatutaria al Congreso se sabrá con exactitud hasta dónde puede llegar el Estado en unas negociaciones que de todas

maneras van a ser sometidas a la refrendación del pueblo.

Es en ese campo donde se debe adelantar el debate sobre los alcances de la justicia transicional.

Sin embargo, lamentablemente, los medios, antes que analizar tan ponderado documento dedicaron sus primeras páginas en la prensa y titulares en la televisión al cruce de palabras cargadas de mutua ironía entre dos altos funcionarios del Estado, al que ellos mismos le restaron importancia.

Es preciso buscar, en materia tan delicada, menos espectáculo y más análisis.

@gomezmenendez